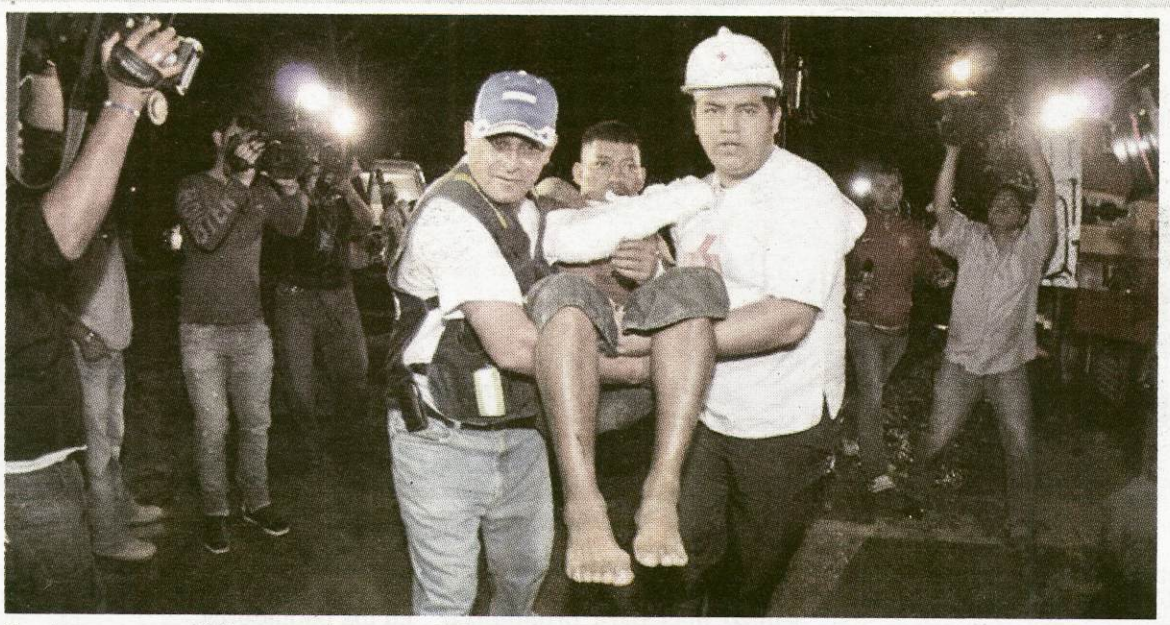
The New York Times

Prisiones condenadas a crisis

Una investigación del diario estadounidense The New York Times establece que el 53 por ciento de las personas que guardan prisión en las cárceles de Honduras aún no ha recibido sentencia, es decir unos 6,500 de más de 12,000 reclusos.

El trabajo periodístico del prestigioso medio de Estados Unidos fue realizado semanas después del incendio en la granja penal de Comayagua, ocurrido el 14 de febrero pasado, con el resultado de 361 reos muertos, como también tras una matanza de 44 privados de libertad en una prisión en México. The New York Times se ha ocupado así de la cruda realidad penitenciaria en Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Venezuela y Colombia.

Candal C. Archibold informó desde El Salvador, México y Guatemala. Contribuyeron: Javier C. Hernández desde San Pedro Sula, Honduras; William Neuman y María Eugenia Díaz desde Caracas, Venezuela; Gene Palumbo desde San Salvador; y Jenny Carolina González desde Bogotá, Colombia.



Bomberos y paramédicos rescatan a uno de los reclusos que sobrevivió al incendio en la granja penal de Comayagua, que dejó como resultado 361 fallecidos.

Los presos en la penitenciaría La Esperanza de esta localidad de El Salvador están hacinados en "las cuevas", llamadas así por los sofocantes espacios debajo de literas, desesperados por un lugar para dormir. Otros se extienden sobre cada centímetro del suelo debajo de una profusión de cables de electricidad expuestos en sofocantes celdas sucias, hasta que pueden reunir los 35 dólares o más que necesitarán para comprar espacio en una litera de otros prisioneros. En estos reducidos confinamientos, esto se ha convertido en un próspero negocio.

Las 19 prisiones salvadoreñas fueron construidas para albergar a 8,000 personas. En últimas fechas, hay 24,000 apretujadas en su interior, dejando a los internos con la necesidad de colgar hamacas del techo o acostarse en el suelo de una biblioteca que está demasiado llena de prisioneros para darle cabida a un solo libro.

Este tipo de hacinamiento no es poco común en América Latina. Pero, después de que un horroroso incendio carcelario matara a 360 presos en Honduras el mes pasado y una matanza acabara con las vidas de 44 personas en México menos de una semana después, administradores carcelarios e investigadores están advirtiendo que el problema ha llegado a nuevos extremos, impulsado por el creciente poder de grupos de la delincuencia y la demanda creciente por detenerlos.

La frustración popular hacia asesinatos, robos, violaciones y ataques ha llevado a represiones de las autoridades que hacen énfasis en los arrestos por encima de los enjuiciamientos, inflamando prisiones y cárceles a veces dos, tres o cuatro veces por arriba de su capacidad con internos que típicamente nunca fueron sometidos a juicio, ya no digamos condenados formalmente.

En una prisión en San Pedro Sula, Honduras, Santos Vicente Hernández descendió a duras penas de una destartalada silla de ruedas y se arrastró por el sucio suelo para hacer uso del baño. Quedó paralizado durante un tiroteo y fue arrestado por alegatos de asesinato hace 12 años, pero sigue esperando juicio, dijo. En la penitenciaría donde está, casi dos tercios de los 2,250 reos - en una prisión construida para 800 - no han sido condenados formalmente, demuestran estadísticas gubernamentales.

"Preferiría estar muerto que estar aquí", dijo Hernández.

Funcionarios venezolanos dijeron que el número de prisioneros a la espera de sentencia o juicio en su país había bajado a aproximadamente 50 por ciento, aunque observadores independientes estiman que esa cifra asciende a entre 66 y 70 por ciento. A lo largo de Honduras, 53 por ciento de los internos no han sido procesados o sentenciados, con base en funcionarios gubernamentales ahí. En Guatemala, la cifra asciende a 54 por ciento; en El Salvador, es de 30 por ciento; y en Panamá, asciende a 61 por ciento, con base en información del Centro Internacional de Estudios Carcelarios, grupo de investigación en Inglaterra. (En Estados Unidos, equivale a 21 por ciento, informa este grupo.)

Observadores de los derechos humanos han hecho sonar las alarmas repetidamente con respecto al hacinamiento y el deterioro de las condiciones. Después del incendio en Honduras, del cual se cree que fue causado por un cerillo o cigarrillo que se dejó accidentalmente en una cama, la oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos lamentó un "alarmante patrón de violencia carcelaria en la región", enumerando una serie de casos en Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina y Panamá.

Se llevaron a cabo audiencias. Después se emitieron informes. Se hicieron promesas.

Pero, de todos modos, "Estaremos hablando de nuevo en dos meses porque habrá otro incidente y más", dijo Santiago A. Cantón, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha visitado 20 prisiones en la última década y emitido informes sobre varias. "Está empeorando, pero la situación ha sido mala desde hace ya largo tiempo atrás".

ATASCADO EN LA MISERIA

El ciclo de desastre, muerte y denuncia se repite con macabra monotonía.

Más de 100 reos murieron en un incendio eléctrico en 2004 en la prisión donde Hernández está detenido. Muy poco ha cambiado desde ese día. Las chispas siguen volando de cables en lo alto del patio cuando llueve. Las vigas siguen dobladas y desfiguradas. Cuando se preguntó que habían hecho oficiales carcelarios para mejorar las condiciones desde el incendio, un grupo de guardias echó a reír.

"Estamos esperando una nueva prisión", dijo Jorge Rubio, un alto oficial.

Funcionarios salvadoreños dijeron que estaban buscando rehabilitar a más prisioneros, pero el esfuerzo a menudo se queda corto. Las clases son pocas en La Esperanza y en otras prisiones, donde los reos a veces optan por enseñar ellos mismos.

"No tenemos ni libros ni nada, pero doy mi máximo esfuerzo", dijo Marvin Flores, de 37 años, delincuente deportado que pasó la mitad de su vida en Los Ángeles y está cumpliendo una condena por extorsión relacionada con una pandilla. Les enseña inglés a otros presos.

A lo largo de la década pasada, Honduras, El Salvador y otros países han incrementado las penas para delitos relacionados con pandillas, aplicando a veces una amplia definición de membresía, incluido tener ciertos tatuajes.

Legisladores hondureños aprobaron el mes pasado una ley que duplica la condena en prisión por extorsión hasta cuando menos 20 años, y continúan las redadas en El Salvador, con los arrestos la semana pasada de más de 50 hombres jóvenes sospechosos de formar parte de pandillas que cometieron asesinatos, extorsión y reuniones ilegales.

Dentro de penitenciarías, algunos gobiernos, como el salvadoreño, han tomado medidas como agregar cámaras de seguridad, bloquear las señales de teléfonos celulares metidos de contrabando y reducir las horas de visita para reducir el contrabando, pero una escasez de guardias bien entrenados, que no sean corruptos, sigue siendo un problema severo, destacaron oficiales.

Quizá sea más evidente en Venezuela, donde armas de asalto, granadas y drogas circulan libremente en algunas prisiones. Los reos en la notoria prisión de La Planta en la capital, Caracas, cargan abiertamente armas de asalto, manteniendo su propio orden despiadado en la ausencia de cualquier otra autoridad.

"Nosotros nos vigilamos solos", dijo Loibis Fuentes, de 37 años, quien está cumpliendo una condena por asesinato en La Planta. "Estamos a cargo de nuestra propia seguridad, limpieza y todo lo demás".

SE LLENAN TAN PRONTO SON CONSTRUIDAS

Incluso cuando los custodios supuestamente tienen el control, a menudo reinan la violencia y la corrupción. En la reciente matanza en México, los guardias liberaron a integrantes de un poderoso grupo criminal, Los Zetas, para que pudieran ir a otro bloque de celdas y matar a 44 integrantes de una pandilla rival. Después de este episodio, el secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré, destacó un plan enfocado a la construcción de ocho prisiones federales este año.

Otros países también han lanzado auges en la construcción de prisiones, incluidos Brasil y Chile. Pero, sin un cambio en los sistemas de justicia o las políticas de combate a la delincuencia, las nuevas penitenciarías a menudo se llenan rápidamente más allá de su capacidad, destacó Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de Delincuentes.

Colombia impulsó la construcción de prisiones varios años atrás y redujo considerablemente el hacinamiento, con base en cifras oficiales. Sin embargo, los progresos fueron efímeros.

El presidente Juan Manuel Santos, quien asumió el cargo en 2010, lanzó una dura aplicación de medidas sobre la delincuencia que dio origen a una ola de arrestos y condenas más severas. Las poblaciones carcelarias se dispararon a lo largo del año pasado, y la saturación es aguda nuevamente.

El Salvador ha aplicado medidas tentativas para reducir su hacinamiento. Una tarde, un grupo de prisioneras empuñaron machetes y otras herramientas filosas de agricultura. No para pelear sino para cuidar de cultivos en una granja carcelaria que abrió en febrero. Un programa similar para varones será inaugurado este mes, enviando a cientos de prisioneros que están cerca de cumplir sus condenas fuera de cárceles sobresaturadas.

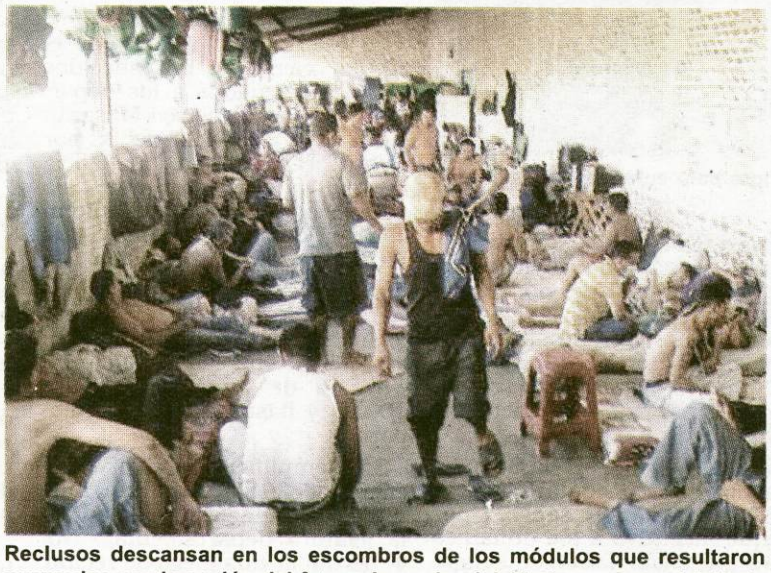
"No había mucho que hacer en la otra prisión", destacó Blanca de Palazos, de 46 años, terminando una condena de seis años por vender cigarrillos de contrabando. "Sin embargo, hay mucho que hacer, y a la mayoría nos gusta cultivar alimento y ser productivas".

Además, El Salvador ha incrementado la supervisión de prisiones. Un banco de 30 pantallas de televisión planas en la dependencia carcelaria de San Salvador, la capital, transmite imágenes desde cada penitenciaría en el país en un esfuerzo por documentar problemas.

Pero, como dijo un oficial: "Nada va a cambiar de la noche a la mañana".

Tenía razón. Una semana más tarde, tres reos fueron muertos en una pelea carcelaria.

Personal de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público trabaja en el traslado de los cadáveres de los privados de libertad que perecieron en el siniestro de la cárcel comayagüense.



Reclusos descansan en los escombros de los módulos que resultaron quemados por la acción del fuego, la noche del 14 al amanecer del 15 de febrero, en el penal de Comayagua.

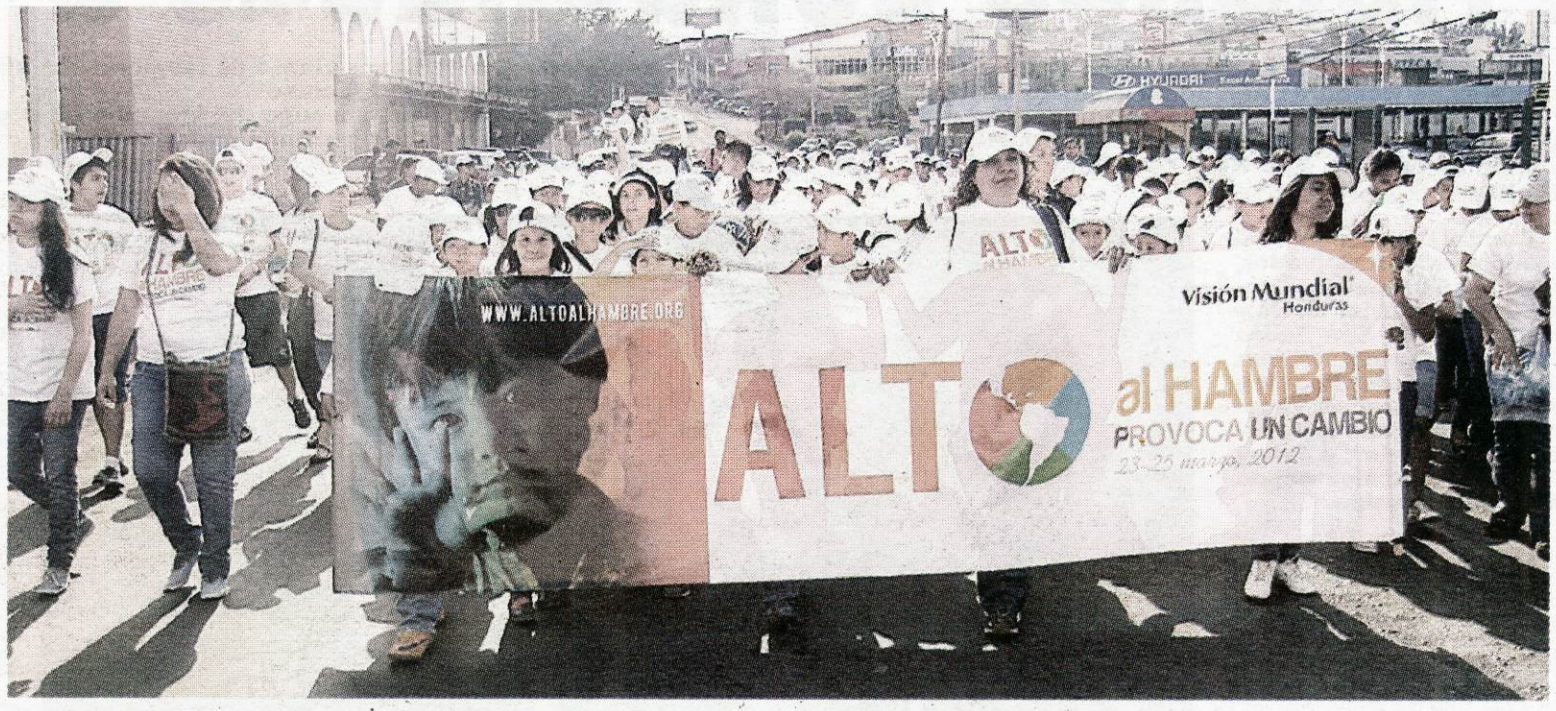
Capitalinos marcharon para pedir un alto al hambre

Decenas de capitalinos marcharon ayer exigiendo un "alto al hambre", para provocar un cambio en esta temática que está afectando a varios países del mundo.

Con el eslogan "Un alto al hambre, provoquemos un cambio ya", varios niños, jóvenes y adultos marcharon desde la Calle de la Salud hasta el mall Las Cascadas en Tegucigalpa.

Desde las 8:00 de la mañana, los manifestantes se trasladaron por una parte del bulevar Kuwait, sitio en el que a cada paso que daban gritaban y exigían un cese al hambre en el país.

Igualmente, mientras se realizaba la caminata los participantes recaudaron fondos para los pobladores de la zona sur del departamento de Francisco Morazán, quienes han sido identificados que entre muchos de sus pobladores a veces no consumen ni los tres tiempos de comida.



Los capitalinos pidieron un alto al hambre ya.

La marcha fue organizada por Visión Mundial y varios patrocinadores de la empresa privada, quienes expresaron que la actividad se desarrolla en otras 11 regiones del país.

De acuerdo a la representante de Visión Mundial, Nitzia Quiñones, la actividad se organizó más para profundizar y sensibilizar a la población y el gobierno que se acabe con la pobreza y consecuente hambre en los pobladores.

Aseguró que esta actividad se realizó en otros países de Centro y Latinoamérica, como en El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y otros.

Comienza campaña de captación de sangre

Ayer se logró captar 42 unidades de sangre para enfrentar la temporada veraniega.

El personal del Banco de Sangre del Hospital Escuela comenzó ayer a captar pintas de sangre fuera del centro asistencial, para enfrentar la demanda que se origina durante la Semana Santa.

La actividad comenzó ayer en las instalaciones de la iglesia Vida Nueva, ubicado en Comayagüela, donde los miembros de esta congregación donaron varias pintas.

La jefa del Banco de Sangre, Geraldina Alonso, destacó la actividad como muy exitosa, pues durante pocas horas lograron captar 42 muestras, por lo que resaltó que "ahora el hospital cuenta con 352 unidades para enfrentar la temporada veraniega", que es cuando más se ocupa sangre, por los accidentes y otros sucesos.

Según Alonso, para la Semana Mayor se quiere contar con más 150 unidades de sangre, por lo que incentivó a los donantes para que sigan dando su sangre esto dentro del hospital. (GZ)

Conadeh

61 policías murieron de forma violenta en el 2011

Unos 61 elementos de las distintas direcciones de la Policía Nacional perdieron la vida en forma violenta durante el 2011, sin que se investigaran los casos, revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Según el documento remitido al Congreso Nacional, las muertes ocurrieron entre enero y diciembre del 2011, a las cuales el Conadeh les ha dado seguimiento, pero la misma policía no se ha interesado en investigar.

La información indica que el 62 por ciento de los fallecidos estaban asignados a los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, y alrededor del 82 por ciento eran parte de la Policía Preventiva y en menor escala miembros de la Policía Penitenciaría, Policía de Tránsito, de Frontera y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

Muchos de los homicidas se ensañaron con las víctimas, al extremo de impactarles entre 10, 20 y hasta más de 30 disparos.

Se ejemplifica como el 8 de enero de 2011, el policía Luis Alonso Domínguez, asignado a la jefatura departamental No. 4, perdió la vida luego de recibir 32 impactos de arma de fuego.

El 28 de junio también fue acribillado con saña el policía clase I, German Danilo Reyes, de 17 disparos, en la primera calle de Comayagüela.

Los altos niveles de impunidad en que se encuentra la mayoría de los crímenes cometidos contra los miembros del ente encargado de la seguridad en el país mantiene preocupado al Conadeh.

El comisionado del Conadeh, Ramón Custodio, cuestionó que la muerte de policías en circunstancias violentas no es investigada adecuadamente por las autoridades encargadas de dar con los responsables de estos hechos delictivos y de allí surge el alto nivel de impunidad.

"Si los policías no investigan adecuadamente la muerte de sus compañeros, menos para que puedan darnos investigación acertada sobre el resto de homicidios y eso es un mal mensaje", sostuvo el ombudsman hondureño.

Ese tipo de acciones que van de la mano con la impunidad, según Custodio, son una muestra de la falta de investigación y de la ineficiencia en el desempeño policial.

Ante esa realidad, Custodio exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad a investigar la muerte violenta de cada policía y evitar que estos crímenes también se sumen a la larga lista de casos impunes en el país.

"Sus compañeros tienen la obligación de investigar estos crímenes hasta dar con los responsables y se les aplique todo el peso de la ley", sentenció

El informe añade que el 20 por ciento de las víctimas falleció en el cumplimiento del deber y un alto porcentaje habría perdido la vida mientras se mantenía gozando de franquicia o de fin de semana.

Añade que al menos, 57 policías, que representan el 93 por ciento de los casos, perdieron la vida por armas de fuego, dos con arma blanca, uno con varilla de hierro y uno supuestamente por estrangulamiento.

En el informe se describe que los crímenes contra miembros de la Policía se cometieron en 12 de los 18 departamentos del país: 20 murieron en Francisco Morazán, 18 en Cortés, 4 en Comayagua, 3 en La Paz, 3 en El Paraíso, 2 en Colón, 2 en Choluteca, 2 en Valle, 2 en Yoro, 2 en Copán, 1 en Atlántida y 1 en Santa Bárbara.

Custodio refirió que la violencia afecta tanto a las víctimas, sus parientes, amigos y a los mismos miembros de la Policía.